

**Consejo de Seguridad**

Distr. general
10 de agosto de 2005
Español
Original: inglés

**Carta de fecha 8 de agosto de 2005 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Presidente interino del
Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud
de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra
el terrorismo**

Me dirijo a usted en relación con la carta de la Presidenta de fecha 3 de mayo de 2005 (S/2005/296). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe de la ex República Yugoslava de Macedonia, presentado de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradecería que hiciera distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) **Ronaldo Mota Sardenberg**

Presidente interino
Comité del Consejo de Seguridad establecido en
virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la
lucha contra el terrorismo



Anexo

Nota verbal de fecha 27 de julio de 2005 dirigida al Presidente del Comité contra el Terrorismo por la Misión Permanente de la ex República Yugoslava de Macedonia ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente de la República de Macedonia ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité contra el Terrorismo y tiene el honor de presentarle el cuarto informe de la República de Macedonia en relación con el cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el apéndice).

Apéndice

Cuarto informe de la República de Macedonia al Comité contra el Terrorismo, presentado en cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

Respuesta a preguntas y comentarios formulados en la carta de la Presidenta del Comité contra el Terrorismo (punto 1) sobre las medidas de aplicación, en particular sobre:

Medidas legislativas orientadas a aplicar la resolución 1373

1.1 Como se indicó en el segundo informe complementario presentado al Comité contra el Terrorismo el 19 de marzo de 2004, la Asamblea de la República de Macedonia sancionó la Ley de reforma del Código Penal de la República de Macedonia (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia*, No. 37/96, 80/99, 4/02 y 19/04). Las reformas reflejan, entre otras cosas, la determinación de la República de Macedonia de mejorar el marco jurídico del país con el objeto de combatir el terrorismo eficazmente en el plano nacional mediante la tipificación de nuevas conductas, la redefinición de delitos ya existentes y la imposición de políticas penales más severas para una serie de delitos, entre ellos, el de “terrorismo” (artículo 313). En ese sentido, se han creado los siguientes nuevos delitos: “organización terrorista” (artículo 394, párrafo a)); “crimen contra la humanidad” (artículo 403, párrafo a); “apología o justificación de un genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra” (artículo 407, párrafo a)); “uso indebido de armas químicas o biológicas” (artículo 407, párrafo b)). Asimismo, de conformidad con la Convención de Palermo, se ha establecido otro delito llamado “blanqueo de dinero y otros bienes obtenidos ilícitamente” (artículo 273).

Además, la Asamblea de la República de Macedonia aprobó el 26 de diciembre de 2003 la Enmienda XIX al artículo 17 de la Constitución de la República de Macedonia (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia*, No. 84/2003), donde se establecen requisitos para que pueda limitarse legítimamente la libertad de expresión y el derecho a la privacidad que están garantizados en general. Además, la reforma a Ley de Procedimiento Penal (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia*, No. 74/2004) establece, entre otras cosas, medidas especiales de investigación que tienen por objeto revelar y recoger información y pruebas contenidas en correspondencia privada siempre que ello se considere necesario para la prevención o detección de actos criminales o estén amenazados los intereses de la seguridad y la defensa. Otras medidas, que se aplican con el propósito de llevar adelante una investigación y deben fundarse en la resolución de un tribunal o juez de instrucción, incluyen la interceptación de comunicaciones, la inspección de sistemas de computación, observaciones secretas, la vigilancia y el registro audiovisual de personas y objetos, la compra simulada de objetos, el ofrecimiento y la aceptación simulados de sobornos, la entrega y transporte controlados de personas y objetos, la utilización de agentes secretos para supervisar y recoger información, la apertura de cuentas bancarias ficticias y el registro de personas jurídicas falsas o la utilización de personas reales para recoger información.

1.2 En relación con el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo, el Ministerio del Interior, encargado de la elaboración del texto correspondiente, ha llevado a cabo un análisis integral del tema y, después de celebrar consultas con otras autoridades gubernamentales competentes, ha llegado a la conclusión de que, en la actualidad, no es necesario sancionar una ley especial de lucha contra el terrorismo dado que la cuestión está suficientemente contemplada en las últimas modificaciones a las leyes y reglamentaciones existentes.

1.3 En 2004 la Asamblea de la República de Macedonia aprobó la nueva Ley de prevención del blanqueo de dinero y otros bienes obtenidos ilícitamente (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia*, No. 46/04). Para más información sobre lo dispuesto en la ley, véanse las respuestas a los puntos 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9.

Medidas dirigidas a combatir la financiación del terrorismo

1.4 La Asamblea de la República de Macedonia ratificó el 6 de abril de 2004 el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, por lo que sus disposiciones pasaron a ser parte integral del derecho interno. Por lo tanto, la República de Macedonia ha cumplido con la aplicación del apartado b) del párrafo 1 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad.

1.5 Véase la respuesta al punto 1.8.

1.6 En virtud de la nueva Ley de prevención del blanqueo de dinero y otros bienes obtenidos ilícitamente, que entró en vigor el 20 de julio de 2004, las siguientes entidades tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir y revelar actos de blanqueo de dinero o transacciones que se sospeche tengan relación con el terrorismo:

1. Entidades financieras y gerentes responsables (se entiende por “entidad financiera” una persona física o jurídica que realiza una o más actividades relacionadas con la toma de depósitos, la aprobación de líneas de crédito, la emisión de tarjetas de crédito o débito, el cambio de divisas, el asesoramiento económico o financiero, los arrendamientos financieros, el factoraje, los seguros, las actividades relacionadas con giros de dinero, las actividades relacionadas con el depósito de valores o dinero u otras actividades financieras que determine la ley).

2. Personas físicas o jurídicas inscriptas para desempeñar las siguientes actividades:

- Actividades en el mercado inmobiliario;
- Auditoría, contabilidad o asesoramiento financiero;
- Servicios notariales o de asistencia jurídica relacionados con la venta de inmuebles o sociedades comerciales; administración de dinero o de giros de dinero, apertura o administración de cajas de seguridad, cuentas monetarias y otros tipos de cuentas; constitución o administración de personas jurídicas; representación de clientes en operaciones financieras y actividades en el mercado inmobiliario;
- Venta de antigüedades y otros objetos de valor;
- Emisión de tarjetas de crédito o débito;
- Fabricación de joyas y venta de joyas y metales preciosos;
- Operaciones de agencias de viaje y turismo; y

- Otras actividades tendientes a la obtención de bienes o a la utilización o administración de dinero o bienes;
- 3. Asociaciones para la organización del juego, apuestas y loterías (casinos, etc.);
- 4. Asociaciones civiles y fundaciones; y
- 5. Oficinas de representantes extranjeros, filiales o sucursales de entidades inscriptas en el extranjero que realizan actividades en la República de Macedonia, así como oficinas de representación, filiales o sucursales inscriptas en la República de Macedonia que realizan actividades en el extranjero.

La nueva Ley de prevención del blanqueo de dinero y otros bienes obtenidos ilícitamente dispone que “cuando existan razones para suponer que una transacción está relacionada con actividades terroristas del cliente o participante en la transacción, o cuando el dinero o bienes objeto de la transacción estén destinados a financiar el terrorismo, además de verificar la identidad del cliente, la entidad tiene la obligación de hacer lo posible por obtener información sobre el curso que siguió la operación, su objetivo y el destino final del dinero, así como sobre quienes participaron en la transacción”. En esos casos, la entidad mencionada tiene la obligación de notificar inmediatamente a la Dirección de Prevención del Blanqueo de Dinero y presentar, antes de las 24 horas de haberse establecido que se trata de una transacción sospechosa, un informe escrito a la Dirección que contenga toda la información relevante relacionada con esa transacción, la identidad del cliente o los clientes y otras personas que hayan participado de la operación.

La Dirección, por su parte, en caso de que sospeche que la transacción está relacionada con actividades terroristas de los clientes o participantes o que el dinero u otros bienes que son objeto de la transacción están dirigidos a financiar el terrorismo (con independencia de la legitimidad o ilegitimidad del origen de los fondos, dinero o bienes) está obligada, dentro de las 24 horas de haber obtenido información sobre la transacción, a solicitar al Fiscal General que decida si adoptará medidas preventivas para detener la transacción e incautar (congelar) provisoriamente el dinero o los bienes. Dentro de ese mismo plazo, la Dirección presentará a la entidad correspondiente la orden de suspender la transacción temporariamente, informándole al mismo tiempo de la solicitud que se ha presentado al Fiscal General. La suspensión ordenada por la Dirección puede mantenerse hasta que el Fiscal General se expida, pero no más allá de 72 horas desde la suspensión de la transacción. Véanse también las respuestas a los puntos 1.7 y 1.8.

1.7 La nueva Ley sobre servicios de giros rápidos de dinero, que fue aprobada por la Asamblea de la República de Macedonia en 2003 (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia*, No. 77/03), regula la constitución de las personas jurídicas y las condiciones bajo las cuales pueden prestarse ese tipo de servicios. En virtud de lo dispuesto en la ley, esas actividades pueden ser realizadas por sociedades comerciales inscriptas y autorizadas por el Presidente del Banco Central de la República de Macedonia para prestar servicios de giros rápidos de dinero en la forma establecida por la ley.

Según la Ley de prevención del blanqueo de dinero y otros bienes obtenidos ilícitamente, las sociedades autorizadas para prestar servicios de giros rápidos de dinero tienen la obligación de tomar medidas para identificar y evitar la comisión de actividades sospechosas que tengan por objeto el blanqueo de dinero o la financiación del

terrorismo, por ejemplo, comprobar la identidad de los clientes antes de que se realice una operación cuando ésta exceda de la suma de 2.500 euros y conservar archivos escritos de la información correspondiente, en orden cronológico. Las sociedades autorizadas a prestar esos servicios tienen la obligación de notificar a la Dirección de Prevención del Blanqueo de Dinero toda transacción (transferencia) que se sospeche haya tenido cualquier tipo de relación con actividades terroristas de los clientes o participantes en la operación, e informar si el dinero objeto de la transacción o las ganancias derivadas de ésta están dirigidos a financiar el terrorismo. La Dirección, por su parte, en caso de que sospeche que la transacción está relacionada con actividades terroristas de los clientes o participantes o que el dinero u otros bienes que son objeto de la transacción están dirigidos a financiar el terrorismo está obligada, dentro de las 24 horas de haber obtenido información sobre la transacción, a solicitar al Fiscal General que decida si adoptará medidas provisionales para detener la transacción e incautar provisionalmente el dinero o los bienes. Dentro de ese mismo plazo, la Dirección presentará ante la entidad de que se trate la orden de suspender la transacción temporariamente, informándole al mismo tiempo de la solicitud que se ha presentado al Fiscal General. La suspensión provisional puede mantenerse hasta que el Fiscal General se expida, pero no más allá de 72 horas desde la suspensión de la transacción.

1.8 Además de lo explicado en la respuesta al punto 1.7, es necesario destacar que la Ley de prevención del blanqueo de dinero y otros bienes obtenidos ilícitamente, cuyas disposiciones están en consonancia con las nueve recomendaciones especiales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la prevención de la financiación del terrorismo, es también la norma principal que regula la prevención del desvío de fondos y otros recursos económicos de instituciones de beneficencia y asociaciones culturales y religiosas para financiar el terrorismo. Según lo establecido en la ley, la Dirección Nacional de Impuestos supervisa la aplicación de las medidas y actividades orientadas a detectar y prevenir actos de blanqueo de dinero y/o financiación del terrorismo por asociaciones civiles y fundaciones como instituciones de beneficencia o asociaciones culturales o religiosas. La Dirección de Prevención del Blanqueo de Dinero, en base a sus propias conclusiones, tiene la facultad de presentar una solicitud a la Dirección Nacional de Impuestos a fin de que investigue las actividades de una determinada fundación o asociación civil, incluidas las instituciones de beneficencia o asociaciones culturales o religiosas. A su vez, la Dirección Nacional de Impuestos tiene la obligación de comunicar a la Dirección de Prevención del Blanqueo de Dinero los resultados de la investigación.

En la República de Macedonia la constitución de las organizaciones sin fines de lucro (asociaciones civiles y fundaciones, como instituciones de beneficencia o asociaciones culturales o religiosas) y las actividades que realizan están reguladas por la Ley de Asociaciones de Ciudadanos y Fundaciones de 1998 y la Ley de Contabilidad para Organizaciones sin Fines de Lucro de 2003. Según lo dispuesto en la Ley de Asociaciones de Ciudadanos y Fundaciones, dichas entidades son personas jurídicas y deben inscribirse y figurar en el registro especial que lleva el poder judicial a esos efectos. El estatuto de la asociación civil o fundación, además del nombre de la entidad, sede social, domicilio, información sobre sus fundadores e integrantes de los órganos de gobierno, indica también el objeto de la asociación o fundación, así como a los fondos o bienes aportados por cada uno de los socios fundadores con el fin de constituir la asociación o fundación y el su origen de los mismos. Según la Ley de Contabilidad para Organizaciones sin Fines de Lucro, esas

entidades están obligadas, entre otras cosas, a llevar registros contables y presentar informes financieros detallados que describan con exactitud los ingresos y gastos y los fondos o bienes de que dispone la entidad y su origen, así como las obligaciones de la entidad. Esos informes financieros deben presentarse una vez por año a la Dirección Nacional de Impuestos y al Registro Central.

1.9 Entre el 1° de marzo de 2004 y el 1° de marzo de 2005, la Dirección de Prevención del Blanqueo de Dinero recibió un total de 36.022 informes, a saber:

- 35.461 informes de bancos sobre transacciones en efectivo de más de 15.000 o 20.000 euros (según las distintas formas admitidas de presentación de informes);
- 2 informes de cajas de ahorro;
- 40 informes de escribanos;
- 489 informes de la Administración de Aduanas sobre las sumas en efectivo superiores a 10.000 euros que atravesaron las fronteras de la República de Macedonia; y
- 30 informes sobre transacciones sospechosas: 14 de bancos, 1 de una escribanía y 15 de instituciones y organismos públicos competentes (véase cuadro).

Informes presentados a la dirección de prevención del blanqueo de dinero

	<i>Informes sin irregularidades</i>	<i>Informes sospechosos</i>	<i>Total</i>
Bancos	35 461	14	35 475
Cajas de ahorro	2	–	2
Compañías de corretaje	–	–	–
Mercado financiero	–	–	–
Compañías de seguros	–	–	–
Casas de cambio	–	–	–
Escribanías públicas	40	1	41
Estudios de abogados	–	–	–
Aduanas	489	1	490
Autoridades competentes	–	14	14

En virtud de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de prevención del blanqueo de dinero y otros bienes obtenidos ilícitamente, la Dirección, en el período mencionado, presentó denuncias penales ante las autoridades competentes (Ministerio del Interior y Policía Financiera; Fiscal General) en cinco casos en los que sospechó la comisión de delitos.

Eficacia de la cooperación internacional en materia penal

1.10. La Ley de Procedimiento Penal reformada (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia* No. 15/97, 44/02, 74/04 y 15/05) en el capítulo titulado “Procedimiento para la prestación de asistencia jurídica internacional y aplicación de los tratados internacionales en causas penales” (artículos 502 a 508), incorpora nuevas normas

con el objeto de ampliar el alcance de la asistencia jurídica, simplificar el procedimiento y facilitar la cooperación e intercambio de información directos entre las autoridades de la República de Macedonia que tienen a su cargo la aplicación de la ley y las autoridades competentes de Estados extranjeros, de conformidad con la legislación de la Unión Europea y las normas internacionales.

Las nuevas soluciones contenidas en el párrafo a) del artículo 505 de la Ley de Procedimiento Penal facilitan una cooperación internacional eficaz. En el caso de que una autoridad extranjera solicite la adopción de las medidas provisionales a las que se refiere el artículo 203 de la Ley de Procedimiento Penal o que se solicite la confiscación de un bien, los tribunales nacionales actuarán de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales en los que la República de Macedonia es parte. Los bienes o ganancias confiscados pueden ser devueltos al país extranjero si así lo dispone el juez basándose, en los tratados internacionales en los que la República de Macedonia es parte. En base a esos mismos tratados internacionales, el juez nacional podría requerir a las autoridades extranjeras la adopción de las medidas provisionales a las que se refiere el artículo 203 de la Ley de Procedimiento Penal y la confiscación de los bienes o ganancias. En el caso de que el tratado estipule que los bienes o las ganancias deban dividirse entre la República de Macedonia y el Estado extranjero, el Ministerio de Justicia de Macedonia presentará la propuesta correspondiente a dicho Estado.

Además, el capítulo titulado “Procedimiento para la publicación de circulares y anuncios de búsqueda”, en su artículo 537, estipula que en los casos en los que se requiera información sobre bienes o ganancias con respecto a los cuales exista sospecha fundada de que se han obtenido ilícitamente, se ordenará la publicación de un anuncio y se solicitará información o una notificación a la autoridad que tenga a su cargo los procedimientos. La publicación de circulares y anuncios de búsqueda está a cargo del Ministerio del Interior o del Fiscal General (durante la etapa preliminar, no penal, del procedimiento) o del juez (durante el proceso criminal). El Ministerio del Interior puede publicar una circular internacional si la persona que se busca se encuentra en el exterior, para lo que debe existir una orden previa de la autoridad competente que ordene la publicación de dicha circular y que establezca que en caso de hallarse a la persona, se ordenará su extradición. Si es probable que los bienes o ganancias se encuentren en el extranjero, se publicará un anuncio internacional que establezca que en caso de hallarse éstos se confiscarán los bienes o ganancias y se congelarán los fondos, como medida provisional. A pedido de la autoridad extranjera, las autoridades nacionales competentes publicarán una circular y un anuncio de búsqueda respecto de personas, bienes o ganancias que se sospeche se hallen en el territorio de la República de Macedonia, siempre que en el pedido de la autoridad extranjera se exprese que, en caso de detenerse al sospechoso, se solicitará su extradición, el congelamiento de los fondos o la confiscación de bienes o ganancias, como medidas provisionales (artículos 535 a 539 de la Ley de Procedimiento Penal).

Conviene destacar que desde la presentación de su último informe al Comité contra el Terrorismo, la República de Macedonia ha ratificado los siguientes instrumentos de lucha contra el terrorismo del Consejo de Europa:

- Convención Europea para la Represión del Terrorismo (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia*, No. 49/04);
- Convenio europeo sobre la transmisión de procedimientos en materia penal (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia*, No. 49/04); y

- Convención sobre la ciberdelincuencia (*Gaceta Oficial de la República de Macedonia*, No. 41/04);

Preguntas y comentarios formulados en el punto 2 de la carta “Asistencia y orientación”

En respuesta a la carta de la Presidenta del Comité contra el Terrorismo de fecha 21 de marzo de 2005 dirigida al Representante Permanente de la República de Macedonia ante las Naciones Unidas en Nueva York, la República de Macedonia ha establecido las siguientes prioridades de asistencia técnica para la ejecución de las disposiciones de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad:

- Aplicación integral del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999;
- Adopción de medidas para el congelamiento de fondos destinados a la financiación de actos de terrorismo, especialmente de aquellos fondos que tengan un origen legítimo;
- Reglamentación de sistemas alternativos de transferencias de dinero; y
- Reglamentación de instituciones de caridad.

Las autoridades competentes de la República de Macedonia han acordado establecer los temas mencionados como prioridades de asistencia técnica.
